

El proceso electoral y las paradojas de la democracia.

Claudia Vega Islas y
Pedro Javier González*

Después de ocho años de reaganismo, la elección presidencial de 1988 despierta, entre los politólogos, un inusitado interés. El carácter militante e ideológicamente combativo de un régimen cuyo titular prometió una "revolución conservadora" que habría de redefinir, desde sus cimientos, la vida política y social de Estados Unidos hace de la presente elección un fenómeno cargado de interrogantes que, con mucho, rebasan los aspectos meramente electorales.

¿Qué se dirime en 1988? Más allá de la retórica, la pregunta se conecta con un vasto conjunto de tendencias y transformaciones en la vida política norteamericana que parecen apuntar hacia una creciente problematización del concepto tradicional de democracia y, por extensión, hacia la apertura de espacios inéditos para la formulación y eventual resolución de los conflictos surgidos a propósito de los temas del consenso y de los requerimientos de legitimidad.

Pero si bien lo electoral, al formularse como interrogante, alude a otras dimensiones del ámbito de lo político-societal y de lo político-estatal, ello no significa postular su omnipotencia hermenéutica de cara a esas otras dimensiones. En este sentido, explorar sus límites explicativos abrirá la posibilidad de una reflexión más rica en torno a las paradojas de un sistema político considerado como la quintaesencia de la democracia. En particular, nos interesa plantear la pregunta acerca de la relevancia de lo electoral, entendiendo como acto ritual fundamental de la democracia, en términos de su capacidad resolutoria de los procesos implicados en la construcción de una nueva forma histórica de consenso y en la formulación política de lo social: legitimidad y ejercicio de

poder como campos problemáticos que, como veremos, en la medida en que en grados variables escapan a la *ratio* democrática, se erigen en motivos privilegiados de análisis.

I. El desplazamiento hacia la derecha

Principio ordenador de la totalidad social norteamericana el liberalismo aparece como sinónimo de identidad nacional: credo básico que confiere significados precisos a una cultura política. Con todo, libertad frente al Estado, individualismo, igualdad jurídica y democracia representativa no son meras entelequias, son valores conformadores de una cultura política dinámica que se transforma en conformidad con los cambiantes escenarios de lo económico, lo político y lo cultural. De esta manera, la historia política norteamericana puede ser interpretada a la luz de las formas específicas e históricas de configuración de un credo básico de naturaleza inequívocamente liberal; es la historia de distintos consensos operativos, de distintas configuraciones ético-instrumentales de un mismo credo liberal.

Hoy en día, una de esas formas históricas —el consenso rooseveltiano— parece definitivamente agotada. ¿Qué la sustituye?, ¿en qué medida la "revolución conservadora" ha propiciado un profundo cambio institucional y cultural susceptible de alterar la legalidad misma del juego político e impuesto, por consecuencia un "nuevo" conjunto de reglas instrumentales y de principios axiológicos a las cuales tanto la forma de concebir la democracia como las de procurar la legitimación y de construir consensos debe responder?, y finalmente, la construcción de un nuevo consenso ¿es un acto democrático?

Mucho se ha hablado de la derechización de los distintos espacios políticos y sociales norteamericanos.

* Centro de Estudios de Estados Unidos, Centro de Investigación y Docencia Económica.

americanos. Y, en efecto, una primera aproximación a ese universo político-cultural permite de inmediato constatar que, hoy en día, Estados Unidos es una realidad social sensiblemente más conservadora que hace diez o veinte años. Lejos de toda forma de radicalismo, el país parece desmovilizado a la vez que reconciliado con los fundamentos mismos del "sueño americano".

En realidad, éste no es un fenómeno nuevo. Lo curioso reside en el hecho de que aparece como resultado de un movimiento que, en su retórica, se pretendía contestario y contrario al orden entonces establecido. Desde este punto de vista, el máximo logro de la administración del presidente Reagan ha consistido en su capacidad para encabezar un amplio movimiento social que lo mismo se alimenta del rechazo populista a toda forma de sofisticación intelectual que de la proverbial desconfianza liberal (en su sentido dieciochesco y clásico) a toda manifestación del poder estatal. Con base en estas premisas, la derecha norteamericana lanzó una demoledora ofensiva en contra de los pilares en que se sustentaban tanto el consenso rooseveltiano como un *establishment* institucional proclive a la reforma y a la ingeniería social.

Varias fueron las fuentes de aquel amplio malestar que, hacia finales de la década de los años setenta, fructificó en la pérdida de credibilidad del viejo consenso rooseveltiano. Las dificultades económicas, principalmente evidenciadas a través de altas tasas de inflación y de déficit crónico en las finanzas públicas, ponían de manifiesto los límites de una política regulacionista de inspiración keynesiana y, por tanto, dieron pie al resurgimiento de nostálgicos panegíricos a las bondades del mecanismo del mercado y de la iniciativa privada, auténtica objetivación de la racionalidad sin más. En un sentido semejante actuaron las transformaciones experimentadas en los ámbitos de las relaciones interpersonales. Y en el de las actitudes vitales ante el sexo, la familia y la autoridad, las cuales, al amenazar los valores tradicionales y la forma de vida de los grupos más conservadores de la clase media blanca, provocaron una fuerte reacción en contra de los excesos de la contracultura y del movimiento pro derechos civiles. Finalmente, el descalabro en Vietnam y el paulatino pero ininterrumpido deterioro hegemónico vinieron a completar el cuadro, toda vez que abonaron el terreno para el desarrollo de un anticomunismo vigoroso y sin complejos de culpa. De esta forma, tanto el consenso como el *establishment* portador de su lógica y de sus valores fueron desacreditados.

Dentro de este marco, el presidente Reagan, apoyado en su carisma y en su capacidad de lide-

razgo, si bien no fue capaz de realizar cabalmente su proyecto de "revolución conservadora" (pues, por ejemplo, aunque golpeado, el estado asistencial aún está en pie), sí logró redefinir los términos del debate político. No es, entonces, de extrañar que la sobriedad fiscal, la necesidad de una menor presencia estatal en la economía, los impuestos reducidos y una actitud firme en materia de defensa, narcotráfico y crimen se hayan convertido en los ingredientes básicos de la nueva ortodoxia política. Tal vez sea aventurado inferir de ello el surgimiento de una nueva forma histórica de consenso con características inequívocamente conservadoras. Sin embargo, lo que no resulta aventurado es la constatación de que la actual agenda representa la principal aportación del reaganismo a las causas de la derecha norteamericana.

La actual campaña electoral es el mejor ejemplo de lo anterior. Además de su pobreza, el rasgo más sobresaliente de los planteamientos de los dos candidatos presidenciales ha sido su dependencia de los temas de la agenda heredada por Ronald Reagan. Esta situación se antoja obvia en el caso de George Bush, quien se ha presentado como el legítimo continuador de una obra de la que, en cierta medida, él es coautor. En dicho sentido, el optimismo es la tónica imperante de su campaña: el orgullo nacional se identifica con la alabanza acrítica de los éxitos y de la ilimitada capacidad norteamericana para salvar todos los obstáculos. En el caso de Michael Dukakis, la influencia de una agenda conservadora sólo se percibe a partir de su apuesta en favor del centro. Ciertamente, ha señalado, aunque sin profundizar, muchas de las contradicciones y de los fracasos del proyecto republicano; no obstante, al tiempo que no ha ofrecido alternativas claras y convincentes, en su manifiesto afán por no contrariar al prácticamente irrecuperable sector conservador de su partido (los blancos sureños), ha aceptado muchas de las definiciones y de los supuestos implícitos en la formulación conservadora de los problemas de la agenda de debates. De esta suerte, y abstracción hecha de las diferencias de matiz (que, en la práctica, pueden llegar a ser verdaderamente importantes, como lo atestigua el *issue* de la ayuda a la contrarrevolución nicaragüense), el candidato demócrata parece haber sucumbido a la lógica conservadora desde el momento en que no únicamente aceptó su definición de los temas del debate, sino que también renunció a un pronunciamiento alternativo sobre los mismos.

De hecho, una de las características más acusadas de la campaña electoral y, en general, del actual clima político e ideológico es la conversión del término "liberal" (en su sentido rooseveltiano,

de acuerdo con el cual es un equivalente aproximado de socialdemocracia) en un auténtico estigma. De ahí que Dukakis haya fracasado sin mucho éxito parecer duro en asuntos de defensa e intransigente en relación con la necesidad de un equilibrio presupuestal. Todo ello evidencia que, a pesar de que Bush es un conservador más moderado y pragmático que Ronald Reagan y de que Dukakis pertenece al ala neoliberal del Partido Demócrata, las tendencias centristas en la política norteamericana no contradicen la hipótesis de la derechización, en virtud de que el centro mismo de gravedad se ha deslizado a la derecha. En todo caso, su mayor moderación y pragmatismo le confieren al proyecto de la derecha un mayor margen de gobernabilidad.

Alcanzado este punto, parece claro que el resultado de la próxima contienda electoral, sin dejar de ser relevante en muchas dimensiones de la vida política, sólo tendrá un significado simbólico desde el punto de vista del proceso de construcción de un nuevo consenso. Ni una victoria republicana podría ser leída en términos de un aval popular a la conversión de los elementos constitutivos del reaganismo en los principios programáticos y normativos del nuevo consenso, ni su derrota podría interpretarse como repulsa popular a dicho legado y, por ende, como anulación de toda posibilidad de configuración conservadora del consenso. Con todo, el resultado podrá influir en la medida en que, vía el ejercicio del poder, se trabaje pacientemente en pro o en contra de un reemplazo conservador para el viejo consenso surgido del New Deal.

A fin de cuentas, la construcción de nuevas modalidades de consenso depende de la evolución de una amplia y compleja gama de factores culturales que, a su vez, determinan formas cambiantes de percibir problemas y de elaborar referentes axiológicos e instrumentales para los mismos. Dadas estas premisas, lo electoral sólo es un indicador adecuado en tanto puede ser analizado como cristalización de dichos factores culturales.

Desde este punto de vista, cabe consignar la existencia de numerosos "insumos" culturales que parecen apuntar en el sentido de una redefinición desde la derecha del consenso. El gran éxito del reaganismo no se debió a su apelación a los valores tradicionales de un puritanismo que definitivamente está condenado a no encontrar sustentos sólidos en una red de relaciones intersubjetivas que se extiende por espacios penetrados y estructurados por la lógica de los medios masivos de comunicación y por los imperativos instrumentales e impersonales de organizaciones crecientemente burocratizadas. En realidad, la

nueva derecha religiosa no impuso ningún programa ni gravitó significativamente en la formulación de las políticas públicas. La clave del éxito del presidente Reagan es mucho más profana y radica en que su discurso denunciador de los males del *big government* y legitimador de las formas más extremas del individualismo encontraron una recepción favorable en amplísimas capas de la población cuyas actitudes morales y vitales son propias de lo que Christopher Lasch ha caracterizado como cultura del narcisismo.

Al desencanto por las utopías fracasadas de los años sesenta le siguió el retraimiento y el abandono de prácticamente cualquier forma de compromiso social. Concentración exclusiva en el propio cuerpo en la propia psique, autocomplacencia terapéutica y hedonismo consumista fueron los "insumos" culturales que garantizaron una recepción favorable a un mensaje que no hablaba de solidaridad sino de interés particular y que, al glorificar al individualismo, equiparaba la idea de libertad con la de mercado autorregulado. De este modo, el retorno a las formas clásicas del liberalismo no ocurrió como producto de la fuerza persuasiva de la noción smithiana de Mano Invisible o del ideal lockeano de Estado mínimo; lejos de ello, fue el resultado de las expectativas hedonistas abiertas por las promesas fiscales del ofertismo.

Pero si bien estas actitudes culturales contribuyen a legitimar, vía su aceptación tácita, las reglas del juego requeridas por la reestructuración capitalista, es igualmente cierto que, amén de su carácter contradictorio de cara a las exigencias funcionales y organizativas de corporaciones cada vez más impersonales, traen consigo un paradójico déficit de legitimación en virtud de su incapacidad para generar formas expresas de consentimiento. Así como el individualismo narcisista favorece el *laissez faire*, de manera análoga fomenta la apatía y la desmovilización políticas. Tal y como lo ilustra la presente campaña electoral, el desinterés es la constante. Incapaces de compromiso con un ideal o con una idea consistente, los individuos buscan espectáculo e imagen en la política. De ahí la importancia del carisma, así como la explicación de campañas y discursos que progresivamente adoptan la sintaxis de los mensajes publicitarios o de las competencias deportivas; y de ahí también los altos niveles de abstencionismo.

II. ¿Un "nuevo" equilibrio democrático?

El éxito provendrá de aquellos que combinan el pragmatismo con la visión necesaria

para ir en consecución de una sabia agenda política.

Washington Quarterly (1988)

La actual coyuntura electoral no exige de la democracia institucionalizada grandes sacrificios o alteraciones a la libertad societal. El orden valorativo ha sido genéricamente definido, y conforme a él, el poder mismo del Estado.

En la múltiple retórica entre los partidos aspirantes al poder se percibe la subsistencia de sólo un orden referencial de pensamiento: el liberalismo del siglo XVIII. Su permanencia ha alcanzado un punto tal en la construcción de la existencia norteamericana que diluye las preferencias diferenciales partidarias de posible alteración del crecimiento económico o de los problemas más graves de la sociedad.

La intencionalidad histórica liberal en su marco societal se diluye, y se habla entonces de la sustitución de un viejo equilibrio por uno nuevo. El reciente desplazamiento hacia la derecha del centro de gravedad de la sociedad denuncia la previa semiplanificación de la vida democrática. ¿Cómo entender entonces a la sociedad democrática norteamericana? ¿Cómo entender ese ejercicio de poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo?

El voto es rito que refleja el consenso básico en torno a la idea históricamente dada de una sociedad en continuo avance a su Destino Manifiesto, idea histórica que, al requerir la reconstrucción de sus contenidos simbólicos democráticos, concedía a la sociedad su capacidad protagónica para que, salvando de la culpa de la desigualdad al proceso capitalista, rescatara las libertades individuales en el marco estatal y se constituyera como colectividad unificada. Las instituciones y los mecanismos sociales pluralistas que surgen entonces en torno al régimen democrático sufren alteraciones que las alejan cada vez más de su forma y fin ideales. La transfiguración del sentido ocurrió; la historia ilustra como aquel elemento tecnificador capitalista opone a quienes buscan en la naturaleza humana la reconstrucción del orden social y a quienes ya la abordan en su acción política inmediata la intencionalidad única de la creación del poder. El pragmatismo y la racionalidad ético protestante ocupan el espacio del orden natural, pero no logran integrarse en aquella filosofía de la historia que pudiera responder a la existencia del hombre. En contraste, ambos —pragmatismo y racionalidad—, se reúnen en una síntesis que despolitiza el orden social al dialogar con una moralidad empírica y útil centrada en los problemas de la desigualdad, y que permite a su vez el progresivo fortalecimiento del espacio estatal

concentrado en la construcción de un fin: el poder. El credo liberal traduce la libertad social en libertad individual, la jerarquía de valores muestra su cara real: en torno a la idea de un Orden se sacrifican los elementos necesarios. El Estado democrático concentra así el poder en su totalidad. El proceso productivo torna a ser el proceso de ejercicio hegemónico; por ende, la responsabilidad colectiva se auna a un principio de responsabilidad moral estatal acorde con un fin retórico societal y real estatal. La acción de grupos capitalistas se reúne en torno a un objetivo definido de desarrollo productivo. El capital y el Estado llegan a un acuerdo absoluto, y en consenso establecen un referente cultural que, estableciendo una relación vertical, desvincula la participación real de la amplia sociedad en la decisión estatal. En su aparición en sociedad, el Estado fragmenta y diversifica su existencia. Subsumido en la forma cotidiana administrativa, el Estado imprime una racionalidad única excluyente de alternativas o alteridades. Por ello, la democracia se reduce al voto o a su interpretación negociadora; y el Estado reifica su presencia omnipresente, y como entidad metapolítica, excluye de su espacio a la sociedad, utiliza a la ideología liberal y a sus sujetos para su manifestación exteriorizada, e imprime en el realismo y la racionalidad su continuidad misma.

La lógica democrática rebasa así la lógica de las instituciones tradicionales. Su pragmatismo usa el lenguaje capitalista. Su racionalidad utiliza la retórica moralista.

En términos prácticos, esta lógica se traduce en la centralización y politización de las instituciones en torno a la idea de la construcción del Estado.

Deploradas por sus efectos destructivos en la memoria institucional, la politización —por un lado— afecta la continuidad objetiva de la organización burocrática; y la centralización —por otro— altera el balance de las atribuciones ejecutivas. Se denuncia entonces el debilitamiento institucional del Estado y se infiere la pérdida progresiva del espacio de su poder. Sin embargo, estos fundamentos de carácter teórico-societal no dan explicación del Estado mismo. Al paralelo, las expectativas de la sociedad respecto del poder del Ejecutivo crecen como consecuencia de la individualización del Congreso, del debilitamiento de los partidos y de los intereses de grupos diversos. Consecuentemente, agregados a los aspectos de negociación o de decisión prácticas, se adhieren a la Presidencia otras demandas nacientes de un público cambiante, de condiciones económicas volátiles o de ocurrencia fortuitas. Contra natura, la Presidencia se personaliza y se presenta como

única alternativa de quebrantamiento a ese impasse político. El presidente pasa a ser entonces el factor exógeno definidor del carácter de lo político-nacional. Pero con ello, las instituciones dejan de ser entidades de poder tanto para su preservación como para su balance. Esencialmente este proceso, ya con continuidad histórica significativa, favorece el incremento de la centralización y politización del sistema mismo. Por ello, aun cuando se conserve cierta congruencia entre las instituciones y los actores políticos, se observa una congruencia predominante entre la Presidencia y el contexto que obliga a que en múltiples ocasiones dejen de observarse las pautas de efectividad y eficacia como decisivas para un conjunto de elementos y se reemplacen por aquéllas que expliquen una amplia dinámica de política en la que la estrategia ha cambiado sus términos de negociación. En el proceso pierden vigencia las entidades que carecen de la información necesaria o sistemática fundamentada a partir de la que se difieren probabilidades de acción política práctica; el peso valorativo de estas entidades es sustituido por elementos subjetivos no necesariamente individualizados, pero que en un marco limitado temporal, visualizan las consecuencias de sus acciones en ese futuro semiplanificado democrático y no en el pasado. En este sentido, la Presidencia ocupa el espacio del Congreso y de otras instituciones "democráticas". La primera se transforma en sujeto flexible y responsivo a necesidades reales de definición de poder; las segundas se revelan como actores poco dinámicos y arraigados en valores democráticos institucionalizados que quedarán fuera de la definición más fundamental de poder. La primera evade o confronta las determinaciones concertadas de las segundas, sea a través de medios judiciales o de procesos burocráticos, pero también convoca a la sociedad —o lo que resta de ella—, o utiliza su derecho de veto para la aprobación de aquellas determinaciones que no puedan ser percibidas inmediatamente como benéficas.

Y en efecto presenciamos el Estado democrático dieciochesco. El asunto Irán-Contra es claro ejemplo de esto. La idea de Estado imprimió una racionalidad a la acción presidencial que escapó al marco institucional o el constitucional, que escapó así a la democracia institucionalizada, pero que después revivía aquellos principios moralistas del siglo XVIII y confirmaba el peso significativo de la estrategia pragmática. El *alter* societal se nulificó en tanto que su sentido participativo activo fue sustituido por otro pasivo de apoyo a la Presidencia, sin pasar para ello a través de las instituciones democráticas.

El presidente ocupa así una posición central. Sin atender a los intereses particulares de grupos

o ignorar problemas específicos, concurre en una posición única de concentración de poder en un contexto anti-estatista y fragmentado en sus instituciones. Esto no permite considerar que obtenga la totalidad del espacio para definir el contenido de la Soberanía Nacional del Estado. Si bien atendemos a un fortalecimiento de la autonomía del Estado, no nos es posible aseverar que la acción pueda asumir una connotación al estilo europeo-burocrático o japonés-tecnificador. Subyace al ejercicio del poder presidencial la racionalidad liberal tradicional que da un nuevo lenguaje a la legitimidad y que, a la vez, muestra un espacio sin posibles escenarios futuros extralógicos a lo ya pensado para la construcción estatal.

III

Más allá de la democracia la principal característica del Estado norteamericano es su racionalidad y su funcionalidad. En realidad, se trata de un Estado ubicado por encima de la nación a la cual únicamente acude para efectos de legitimación y consenso, pero no para definir un proyecto. En este sentido, la nación aparece desobjetivada, carente de racionalidad y por lo tanto, como objeto al cual desde fuera debe imprimirse un principio axial organizador. El elemento fundamental subyacente a los sentidos que se imprimen es la moral, pero no la puritana, sino la ética de responsabilidad.

La historia deja de ser integradora de la comunalidad Sociedad-Estado. En contraste, pasa a ser creativa del Estado que transforma la racionalidad en virtud y por ende, avala el pragmatismo y juicio realista que, en conjunto, excluyen a la Sociedad en la definición de su futura existencia. El Estado es quien controla la totalidad del proceso: el futuro así, aparece como calculable; la intencionalidad adquiere un contenido nuevo en el que los valores son utilizados para presentar como derivado del "bien común" aquello que en realidad obedece a las necesidades de legitimación y consenso. Esto plantea un sentido paradójico del voto. Si el votante fuera racional, podría, incidir con su voto directamente sobre la decisión política, pero ello implicaría por un lado, la hipótesis poco realista de que el votante cuenta con la información adecuada, y por otro, la hipótesis probable de que se causarían conflictos de gobernabilidad grave. Ello nos conduce a considerar que el voto es elemento integrador de solidaridad, ritualidad e identificación, más no soluciona la objetivación del sujeto social que desprotagonizado, no participa en la configuración del espacio estatal. El Estado es sujeto activo que planea racionalmente la libertad y la ocurrencia histórica de la totalidad societal.